

Cuba: entre el mercado mundial y la utopía. (Notas para un debate socialista)

Haroldo Dilla Alfonso*

El 26 de julio de 1993, el presidente Fidel Castro advirtió a la sociedad cubana de la imposibilidad inmediata de continuar desarrollando el sistema socialista en el país. En su lugar, afirmó, la sociedad debe esforzarse por conservar "las conquistas del socialismo", y reafirmar su derecho a continuar construyéndolo en el futuro.¹ Tal sentencia pronunciada por Fidel Castro —conocido como uno de los más intransigentes revolucionarios de nuestro siglo— resulta desacostumbrada pero no absurda. En realidad, el dirigente cubano no sólo estaba reconociendo que la sociedad cubana sufre hoy una crisis económica de gran magnitud, sino sobre todo la tragedia del impacto desocializador² de las me-

¹ *Granma*, La Habana, 27 de julio de 1993.

² Aurelio Alonso. "Los desafíos de un ajuste sin desocialización", *Cuadernos de Nuestra América*, No. 19, julio-diciembre de 1992.

* Polítologo e investigador titular del Centro de Estudios sobre América, Cuba.

didadas adoptadas —inversiones extranjeras, privatización, desregulación económica— para garantizar la sobrevivencia nacional.

La propuesta del presidente cubano rebasa con mucho el interés parroquial. En realidad se trata de una problemática más profunda y universal que atañe a la viabilidad de proyectos estatales anticapitalistas —es decir reevaluadores de la justicia social, la democracia participativa y la independencia nacional— en el mundo contemporáneo. O en otras palabras, ¿cuáles son los límites para la consecución de estas metas solidarias que han estado en el centro de los proyectos más relevantes de cambio social en la historia de la humanidad?.

La sociedad cubana ha asumido la gravedad del momento. En consonancia con ello, existe un consenso mayoritario a nivel nacional de que tal situación sólo podrá ser resuelta mediante acciones muy audaces dirigidas a insertar la economía cubana en el sistema mundial, que tal inserción implica inevitablemente una variación cardinal de las reglas de juego que orientaron la producción, la distribución y el consumo en la sociedad cubana por cerca de tres décadas y que todo ello tendrá un precio en términos sociales, políticos y culturales. Sin embargo, tal consenso dista de existir si de lo que se trata es de discutir qué tipo de acciones deben emprenderse y cuál es el peso de (y la forma en que deben conjugarse) lo económico y lo político en el paquete de medidas a adoptar.

Un punto de vista muy extendido —y predominante en la esfera oficial— enfatiza el carácter económico de la crisis actual. En consecuencia, lo económico adquiere un espacio privilegiado y el acceso a tecnologías, mercados y financiamientos adquiere una centralidad casi excluyente al menos en el mediano plazo. Aquí el campo de *lo político* queda reducido a una función básicamente adaptativa respecto a la emergencia de nuevas reglas de juego en cuanto a la organización e interacción de los sujetos en la economía. Siguiendo esta perspectiva, Cuba requeriría de adaptaciones políticas modernizantes y liberalizantes, regularmente remitidas a la desconcentración de la autoridad, una definición más nítida de los perfiles y roles institucionales, una mayor autonomía de los aparatos económicos y la apertura de espacios localizados de negociación con grupos económicos y sectores sociales. Se trataría de una versión unilateral y edulcorada del modelo chino, que acepta sus altos índices de crecimiento económico en combinación con una retórica vanguardista legitimadora de una alta concentración del poder político, y omite el florecimiento de la corrupción, la alienación y la despolitización de los sectores populares, entre otros factores que han conducido a consecuencias trágicas mundialmente conocidas.

Huelga apuntar que una formalización del sistema político entendida en tales términos, combinada con una lógica económica subordinada al mercado mundial, bordea permanentemente el abismo de las tantas "aperturas democráticas" que en realidad han servido de cobertura a

restauraciones capitalistas y al bloqueo de alternativas populares de cambio. Por esta vía, para decirlo más claramente, la sociedad cubana podría llegar a estándares aceptables de eficiencia económica, pero difícilmente sería eficaz en relación con las metas socialistas de autogestión y autorrealización humanas.

Desde la perspectiva que compartiré en el curso de este artículo, y cuyo compromiso medular estriba en la necesidad de salvar y desarrollar al proyecto socialista y patriótico cubano, /opo/íf/cotiene un rol protagónico y autónomo respecto a las acciones y estrategias económicas.

No se trata de un disenso adjetivo. Ante todo porque cualquier proyecto de desarrollo tiene un costo, y su viabilidad depende en buena medida de la fundamentación de un consenso nacional acerca de la deseabilidad de los objetivos propuestos y de los medios pertinentes para ser alcanzados, a través de acciones públicas relativas a la aceptación (o transformación) de valores, normas, creencias, y la creación de un escenario potenciador de la identificación del ciudadano común con las metas trazadas. Todo proyecto socialista, y particularmente el cubano, es un proyecto de alta densidad político-ideológica. Si algo permite explicar que tras muchos meses de aguda escasez de todo género no haya surgido un movimiento de oposición antisistema coherente, ello está dado por la propia fuerza política, ideológica y ética del hecho revolucionario.

De esta manera, la sociedad cubana contemporánea enfrenta un reto multidimensional que atañe a cómo lograr una reactivación económica a través de vinculaciones externas extrañas a su formación económico-social y, al mismo tiempo, consolidar los fundamentos de esta formación. Se trataría de reexaminar las bases mismas del consenso político nacional y su reformulación en función de la reproducción del proyecto socialista. Todo lo cual es de tan imposible consecución en un escenario liberal, como inseparable de una convocatoria democrática, participativa y pluralista.

Por supuesto, existen numerosos argumentos en contra de la viabilidad de un ensayo democratizador y participativo en la Cuba contemporánea. En esta línea, por ejemplo, se inscribe la idea muy extendida de que nunca los momentos críticos han sido escenarios adecuados para ensayos democráticos de envergadura. Y ciertamente la historia mundial reciente indica que las experiencias nacionales que con más éxito han enfrentado el "desafío exportador", no importa

³ Las referencias aquí al liberalismo político y su improcedencia en la experiencia cubana no constituye una negación de aquellos valores liberales relativos a la libertad y la individualidad que resultan orgánicos a cualquier concepción genuinamente democrática. Me refiero al liberalismo como un cuerpo teórico y de práctica político-social dirigido a legitimar y reproducir la acumulación capitalista. Es justamente sólo a partir de la crítica a este rol histórico del liberalismo que algunos de sus valores pueden adquirir una carta de universalidad democrática. Para una discusión sobre el tema véase de S. Bowles y H. Gintis. *Democracy and Capitalism*, Basic Books Inc. Publishers, New York, 1986.

cuáles hayan sido sus signos ideológicos, han transitado por la extensión de prácticas autoritarias, una suerte de precio político que desde el punto de vista tecnocrático pudiera ser considerado irrelevante frente a los resultados económicos positivos. Ello, valga destacarlo, tiende a potenciar los ánimos de algunos sectores de la clase política y la burocracia que presienten en el vocablo democracia un cierto tono subversivo y que de hecho se ubican a la derecha no ya de Carlos Marx, sino de John Stuart Mili.

Pero incluso tomando nota de tales precedentes y de las tensiones reales que enfrenta un proyecto de reconstrucción nacional de la magnitud que enfrenta el cubano, la construcción de una democracia participativa y pluralista aparece como una condición para la resistencia patriótica y para la articulación del consenso en torno a un camino que aparece lleno de obstáculos y sacrificios. La historia no concede plazos sólo a cambio de promesas. Probablemente el mensaje más evidente que nos ha legado el derrumbe del socialismo burocrático este-europeo ha sido la necesidad de reinterpretar la relación democracia-gobernabilidad en un contexto socialista, donde sólo la ampliación democrática, la aceleración de su ritmo de construcción es capaz de asegurar la estabilidad y gobernabilidad del sistema. En momentos en que la ampliación de la participación aparece como impertinente para la reproducción capitalista (y muy dramáticamente en el sur subdesarrollado) y el propio vocablo democracia liberal muestra su contradicción interna, el dilema opuesto en un proyecto socialista apunta a su superioridad como matriz de una democracia genuinamente participativa. Y en consecuencia, las capacidades del socialismo cubano para garantizar su gobernabilidad y continuidad se sitúan en relación directa con la magnitud de su construcción democrática. Sería, empleando el marco conceptual construido por Therborn, la evitación de un agrietamiento de la relación cualificación-sometimiento, cuya estabilidad resulta vital para la reproducción de cualquier agregado social, y cuyo desfase produce "la oposición y la revuelta, o el bajo rendimiento y la renuncia".⁴

Por supuesto, habría que reconocer que cualquier propuesta democrática en Cuba no puede prescindir de la tragedia geopolítica que entraña la obsesiva hostilidad norteamericana respecto a la Revolución Cubana. La política de Estados Unidos hacia la isla ha estado orientada durante décadas por el anhelo de la ultraderecha del exilio y del neoconservadurismo norteamericano por producir una suerte de marcha versallesca sobre la comuna de París que pondría en peligro la existencia de la nación y haría retroceder a la historia, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de defender la independencia nacional frente a la única superpotencia "realmente existente". Ninguna formulación política en Cuba sería realmente democrática si no lleva implícita

⁴ Goran Therborn. *La ideología del poder y el poder de la ideología*, Siglo XXI Editores, Madrid, 1987. Huelga apuntar hasta qué punto las sociedades revolucionarias están expuestas a estos conflictos dado el dinamismo del ascenso social que les caracteriza, y en consecuencia el grado en que están obligados a asumir periódicos reexámenes y modificaciones institucionales.

la materialización del derecho exclusivo de los cubanos a decidir su propio destino sin imposiciones externas.

Antes de revisar con más detenimiento aquellos aspectos que considero modulares de la situación crítica actual, conviene recordar brevemente una historia que tiene implicaciones presentes mayores de lo que pudiera suponerse.

El proyecto revolucionario cubano ha gozado desde sus inicios de un fuerte consenso popular íntimamente vinculado a su autoctonía. Durante la década del 60 el consenso político estuvo apoyado en la capacidad del proyecto revolucionario para rescatar un conjunto de valores orgánicos a la cultura política popular (la eticidad como rectora de la acción política, el nacionalismo antiimperialista, el igualitarismo, etc.), en un fuerte proceso redistributivo de las riquezas y el poder y en una dinámica relación entre el joven liderazgo revolucionario y las masas populares.

La década de los 70 fue escenario de un momento clave de reinterpretación de valores y de rearticulación del consenso político sobre la base de la inserción favorable de Cuba al submercado soviético y de la implementación de un modelo de crecimiento extensivo.⁵ Ello no sólo permitió una ampliación considerable de los niveles de consumo personal y social, sino también el diseño de una institucionalidad cuyo pivote era un esquema de participación-legitimación de corte paternalista.⁶

Las primeras fisuras del modelo —y también del esquema de participación-legitimación sobre él diseñado— aparecieron cuando los soportes externos comenzaron a deteriorarse, particularmente desde 1986. Fue precisamente en este escenario crítico cuando se inició el *Proceso de Rectificación*. La rectificación constituyó en muchos sentidos un proyecto positivo, encaminado a un reencuentro con los valores y el pensamiento político autóctono y a producir una desformalización y dinamización de los espacios democráticos existentes. Pero al mismo tiempo fue dramáticamente omiso en cuanto a la propuesta de una definición sistémica de la economía y en la aplicación de aquellos ajustes económicos imprescindibles para afrontar la crisis en ciernes. Sin espacio para detenemos en este polémico asunto, valga anotar que cada acción pospuesta entonces ha tenido que ser adoptada más adelante (o tendrá que serlo) en un contexto económicamente más desfavorable y cuando las capacidades regulatorias del Estado son menores.

Pero de cualquier manera habría que anotar que la rectificación tuvo poco tiempo y menos

⁵ Un análisis de este modelo y sus puntos débiles puede hallarse en el artículo de Juio Carranza. "Cuba: los retos de la economía", *Cuadernos de Nuestra América*, La Habana, No. 19, julio-diciembre de 1992.

⁶ Haroldo Dilla, G. González y A. Vicentelli. *Participación y Desarrollo en los municipios cubanos*, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1993.

oportunidades de despliegue y sus propuestas fueron bruscamente sepultadas por la crisis económica. En 1990 la economía decreció 3.6%, y en el año siguiente se produjo un desplome de alrededor del 25%. Los expertos calculan que en 1992 —cuando el país funcionó con sólo un tercio de su capacidad de compra respecto a 1989— se produjo un decrecimiento cercano al 10%, y 1993 se aprecia aún más difícil. Para cualquier observador medianamente agudo se presenta una realidad dramática: la dinámica de la economía interna apenas ha sido capaz de solventar su reproducción simple. En consecuencia, desde fines de 1990 se puso en marcha un programa de emergencia que ha sido conocido como *Periodo Especial*.

El Periodo Especial significa ante todo garantizar la sobrevivencia nacional en condiciones internas sumamente delicadas y en un medio internacional severamente hostil marcado por la persistente agresividad norteamericana contra el proyecto socialista cubano. La consigna que ha predominado en la convocatoria pública —*resistir*— refleja crudamente la gravedad del momento. Hay poco espacio para imaginar otra opción. El dilema planteado es, por consiguiente, cómo hacerlo con las mayores probabilidades de éxito. Y sin que las medidas de corto plazo hipotequen el futuro socialista.

El costo de la inserción económica

La economía cubana enfrenta, al igual que el resto de las economías tercermundistas, lo que se ha denominado "el desafío exportador". Como éstas, debe enfrentarlo mediante la extensión de su presencia en los mercados internacionales, particularmente apoyada en exportaciones dinámicas. Al mismo tiempo, una respuesta contundente a este desafío involucra inevitablemente otras acciones dirigidas al desarrollo interno, al logro de índices superiores de productividad y de incorporación de avances científicos y tecnológicos y a la maduración de un consenso nacional suficiente para otorgar sostenibilidad al proyecto.

Cuba, sin embargo, enfrenta el "desafío exportador" en condiciones no sólo desventajosas sino también muy contradictorias. En el plano internacional, la economía cubana ha sufrido un brusco desarraigo de los que fueron por casi tres décadas sus mercados preferenciales, carece de otros soportes extranjeros y simultáneamente se enfrenta a un mercado mundial no sólo competitivo y excluyente en términos económicos, sino también políticamente condicionado por la obsesiva hostilidad norteamericana. En el plano interno ello supone un costoso y paulatino proceso de reconversión tecnológica que implica, en primer lugar, a la tecnología "dura" poco competitiva y, en segundo lugar, una vasta reorganización de las relaciones entre los sujetos económicos en la producción, la distribución y el consumo, y que no podrá evitar profundas consecuencias políticas y sociales.

No sería posible, a la luz del propio conocimiento acumulado en torno a un proceso de cambios emergente y expresado en términos muy tendenciales, adelantar aquí un examen completo de las transformaciones contradictorias que se producen y continuarán produciéndose en la sociedad cubana. Es posible, sin embargo, acercarnos a algunas de sus aristas más visibles, particularmente en lo que se refiere a las nuevas articulaciones dadas en los procesos de producción, distribución y consumo, así como sus incidencias en la complejización del sujeto popular, en la redistribución de las cuotas de poder social y en el campo de la ideología.

Los diseñadores de la estrategia económica cubana han tomado nota de los descomunales obstáculos que les separan del mercado mundial. Sucintamente, su diseño ha estado basado en acciones como la sustitución de importaciones y en particular la obtención de niveles considerables de autosuficiencia alimentaria; el fomento de nuevas fondos exportables dinámicos; el desarrollo de tecnologías de punta; y la captación de financiamientos y tecnologías a través de la incentivación de la inversión extranjera. En consonancia con ello, se han producido diversas adecuaciones constitucionales, legales y operativas en función de abrir espacios confiables a la inversión extranjera y de agilizar las capacidades de respuesta de las instituciones económicas cubanas. En este último sentido, se han puesto en práctica acciones descentralizadoras de los procesos de toma de decisiones y de extensión de los mecanismos de mercado, particularmente en áreas vinculadas al sector externo. No obstante que ninguno de estos pasos ha implicado la propuesta de un sistema de dirección y planificación económica —tal organización sistémica ha sido oficialmente considerada imposible a partir de las condiciones de emergencia existentes— no caben dudas de que la magnitud de sus propuestas están llamadas a trascender el espacio temporal en que fueron concebidas y el propio radio de acción en que están supuestas a operar.

La presencia en las áreas más dinámicas de la economía de parcelas controladas total o parcialmente por la inversión extranjera, o que, aún bajo propiedad estatal, deberán tener en cuenta nuevas reglas de juego dictadas por el mercado, producirá cambios sustanciales en la forma en que se organiza la producción, la distribución y el consumo. En la misma medida en que ninguna economía se organiza en estancos particulares, sino como un sistema de vasos comunicantes, estos cambios deberán repercutir en el resto de la economía nacional, obligada a sucumbir o a buscar niveles de eficiencia competitivos a nivel mundial y en consecuencia adoptar los mismos patrones tecnológicos y organizacionales que el área mixta y privada.

Un primer y más significativo impacto está teniendo lugar en la propia matriz productiva, lo que implica alteraciones significativas en la naturaleza y las relaciones de los sujetos económicos en la producción. En primer lugar, por las propias transformaciones que debe sufrir el sector de los empresarios, engrosado con una cantidad creciente de inversionistas foráneos portadores absolutos de una cultura de mercado, y a la cual deben adaptarse los administradores estatales en un nuevo contexto de relaciones empresariales que les provee de mayores cuotas de poder

(en buena medida provenientes de sus relaciones con el mercado mundial capitalista), pero también les exime de la protección paternalista del Estado central.⁷ En segundo lugar, porque ello se traduce al nivel intraempresarial en la emergencia de un nuevo escenario que tendrá que prescindir de la no menos paternalista legislación laboral vigente en los 80 (sin lugar a dudas un componente del consenso laboral existente) y que no podrá evitar un nuevo marco contradictorio, no necesariamente entre el capital y el trabajo (lo cual puede ser mediado por el Estado socialista incluso allí donde ese capital tiene una presencia efectiva), sino en relación a ese mismo Estado socialista que precisa altos niveles de acumulación y conduce su actividad bajo dictados tecnológicos y de productividad alentadores de esquemas de utilización intensiva de la mano de obra.

Un escenario de tal naturaleza implica inevitablemente el deslizamiento de cuotas mayores de poder en beneficio de las élites empresariales y la obsolescencia de muchos de los mecanismos, prácticas y espacios de participación que habían caracterizado al esquema paternalista precedente. Y por consiguiente, pone sobre el tapete la necesidad de un proceso de readecuación y construcción institucional capaz no sólo de absorber las contradicciones emergentes sino también de dotar a los sectores trabajadores de mecanismos de poder, acción y negociación acordes con la nueva realidad.

Esta proyección contradictoria no ha estado ausente de los diferentes proyectos de "perfeccionamiento" empresarial que se han estado desarrollando en el país. Este es el caso, por ejemplo, de los proyectos de renovación implementados en algunas industrias militares, y que se han apoyado —de acuerdo con sus diseñadores— en la evaluación sistemática de las experiencias nacionales y de los diferentes modelos vigentes en las economías desarrolladas de Europa Occidental y Japón. Sus elementos novedosos son palpables en cuanto al uso más intensivo de las tecnologías y de la fuerza de trabajo, en la introducción de un sistema más flexible de organización del trabajo y de estímulos a la productividad y la eficiencia, etc.⁸

La propuesta de una "participación por objetivos" —pivote clave del diseño participativo contenido en el esquema— resulta sin lugar a dudas superior a las prácticas previas, marcadas por el formalismo burocrático y el paternalismo. Pero al mismo tiempo cabría preguntarse si la rearticulación de un consenso laboral basado en relaciones salariales satisfactorias y en espacios participativos acotados por criterios de racionalidad técnica, pudiera ser considerado una condición suficiente de cara a la transferencia de cuotas cada vez más significativas de poder a los

⁷ La relación de las empresas con el Estado Central constituye un tema específico al que no nos referiremos aquí. Valga notar que ello constituye un punto clave de la reestructuración socioeconómica y política del país.

⁸ Julio Casas Regueira, *et al.* **A problemas nuevos, soluciones nuevas**, Editora Política, La Habana, 1990.

sectores empresariales (estatales y privados extranjeros) y sin perder de vista las metas estratégicas socialistas.

Por esta vía, para decirlo gráficamente, se podría lograr que los obreros cubanos canten cada mañana con sincero entusiasmo el himno de su empresa, pero de ninguna manera conduciría a la construcción de una democracia participativa en la que cada sujeto involucrado —y no únicamente las élites tecnocráticas empresariales— devenga un participante efectivo en la toma de decisiones más relevantes.

Otra de las aristas contradictorias que se deriva de esta situación está relacionada con el tema del empleo. La consecución del pleno empleo fue sin lugar a dudas una victoria política y social del programa revolucionario y un componente básico del consenso político. Habría que reconocer, sin embargo, que carente de una dinámica económica suficiente, el pleno empleo sólo pudo ser obtenido al precio de la extensión del subempleo, y a la larga éste devino en un factor obliterador de la eficiencia productiva. No olvidemos que según estimados, hacia 1987 cada trabajador cubano vinculado a la producción directa laboraba para él y otras cuatro personas, todo ello en el marco de una baja productividad y de un sistema que garantizaba los servicios sociales y el consumo subsidiado a todas las personas.

Esta situación se torna crecientemente incompatible con las nuevas modalidades de acumulación y de reproducción económica. Por un lado, la propia reestructuración económica exige reajustes del empleo existente y la expulsión de la fuerza de trabajo supernumeraria, sea por racionalizaciones internas en las empresas o por la simplificación de grandes organismos burocráticos a cargo de funciones poco relevantes en el nuevo escenario. Por el otro, el Estado pierde capacidad para crear nuevos puestos de trabajo y satisfacer la demanda de los recién llegados al mercado laboral. Y aun cuando los índices de desempleo son bajos —en buena medida gracias a la política asistencialista del Estado—, ello plantea para la sociedad cubana un reto totalmente nuevo en los tres decenios de vida revolucionaria: el desempleo se ha incrementado y continuará haciéndolo hasta devenir en un componente social y económicamente estructural.

Las consecuencias son previsibles. En primer lugar, la reversión parcial de logros socio-políticos alcanzados en décadas anteriores. En términos globales, ello implicaría la necesidad de medidas en aras de evitar la pobreza y la marginación de la población afectada. Pero sobre todo, nos interesa aquí la probable incidencia selectiva que ello debe tener sobre los sectores más vulnerables, como la población de jóvenes recién llegados al mercado laboral y las mujeres.

En este último caso conviene detenernos brevemente. El sector femenino fue desde los inicios del proceso revolucionario un sector social que gozó de una política diferenciada de

promoción. Tal política estuvo asentada en dos pivotes claves. Por un lado, la propia dinámica económica motivadora de una alta movilidad social. Por otro, la organización de la población femenina en una instancia propia —la Federación de Mujeres Cubanas— concebida como una típica "correa de transmisión" en relación con el Partido, pero capaz de una considerable actividad política. En consecuencia, la mujer cubana ha logrado una presencia muy relevante en la producción y los servicios, llegando en algunos sectores vitales, como la salud y la educación, a ocupar posiciones mayoritarias. Sin embargo, al mismo tiempo se debe anotar que muchos de los cotos fuertes de empleo femenino —trabajos burocráticos y secretariales— son precisamente aquellos que más deben ser afectados en una lógica racionalizadora del empleo y que, de igual modo, la mujer resulta más afectada por la acentuación de las dificultades relativas a la reproducción de la vida cotidiana, todo lo cual agudiza su debilidad sectorial ante un mercado laboral más exigente y selectivo. No es casual que, según cálculos académicos, la presencia femenina en el total de desempleados se haya incrementado de un 53% en 1985 a un 60% en 1990. Es justamente en este contexto cuando es legítimo creer que el movimiento femenino cubano requiere de una dosis mayor de autonomía, de una proyección política más dinámica y de una proyección programática alineada con los intereses más específicos del sector en las nuevas condiciones.

Aun cuando los efectos más negativos del desempleo puedan ser paliados por una voluntad política comprometida con la justicia social, mediante subsidios u otros programas sociales y económicos, tal y como se refleja en los resultados del IV Congreso del Partido Comunista,⁹ esta es una opción que enfrenta serias objeciones de racionalidad económica y, por consiguiente, resulta limitada en sus alcances si no va acompañada de otras acciones dirigidas a la estimulación del empleo por cuenta propia y de otras formas de iniciativa privada que, sin afectar los principios socialistas fundamentales, cumplan un rol positivo en términos sociales.

Esta última consideración nos lleva directamente al sensible tema del *sector informal* en la economía cubana, es decir, de aquel sector de producción o servicios que se realiza fuera de las relaciones económicas oficiales—sean estas últimas privadas o públicas—y que por consiguiente resulta difícilmente medible y controlable. Dicho sector tiene un expediente zigzagueante en los últimos tres decenios, tanto como zigzagueantes han sido las políticas oficiales. En los años inmediatos posteriores a 1959 existió una actitud de aceptación del pequeño negocio productivo o comercial, lo que varió radicalmente desde 1968. Por entonces, en el marco de un periodo que

⁹ El IV Congreso del PCC, celebrado en octubre de 1991, tomó nota de la complejidad de este problema y propuso acciones tales como el mantenimiento de subsidios y la traslación de fuerza de trabajo hacia sectores de mayor demanda, conservando el derecho de cada ciudadano a un puesto de trabajo honroso. Estas provisiones, sin embargo, están circunscritas al período crítico, y dicen poco sobre el carácter estructural del problema. Véase *Este es el Congreso más democrático*, Editora Política, La Habana, octubre de 1991.

ha sido oficialmente calificado como "utópico", se desarrolló una campaña de "ofensiva revolucionaria", dirigida a liquidar los restos materiales del capitalismo y a producir nuevos avances hacia la meta comunista. Excepto la pequeña propiedad agrícola —cuyas relaciones comerciales fueron severamente limitadas a los nexos con el Estado— y algunas cooperativas de propietarios de vehículos automotores, todo el sector privado mediano y pequeño fue estatizado. No fue hasta la introducción del SDPE en la década del 70, que se dieron nuevos pasos para permitir la acción privada en algunos servicios y producciones por cuenta propia, y se estimuló la relación directa entre los pequeños productores agrícolas y los consumidores mediante la creación del "mercado libre campesino".

Esta nueva apertura fue cerrada una década después en el marco de la rectificación, y de hecho el "mercado libre campesino" fue incluido en la lista de los "excesos mercantilistas" a corregir. El IV Congreso del PCC, por su parte, volvió sobre los pasos anteriores, y, conjuntamente con la garantía de respetar la existencia de la propiedad cooperativa e individual en el campo agropecuario (no así respecto a forma alguna de mercado libre campesino), se pronunció por regular el trabajo personal por cuenta propia sobre todo en el sector de los servicios menores, así como "otros que puedan surgir asegurando que brinden su trabajo a la sociedad en los límites y conveniencias que imponen circunstancias del periodo especial y de la construcción del socialismo".

Por supuesto que cuando el Congreso del PCC se pronunciaba en torno al sector informal, no estaba refiriéndose sino a un hecho en dramático crecimiento y en relación directa con la desproporción existente entre una oferta de bienes y servicios muy constreñida y una demanda dilatada. Los montos de este sector informal, y de la economía sumergida sobre la que se asienta, son difícilmente calculables pero estimaciones tentativas han sugerido una masa monetaria similar a la que circula en el mercado formal y el involucramiento sistemático de algo más de medio millón de personas.

Esta situación suscita innumerables problemas. Ante todo, el sector informal y la economía sumergida que le sirve de sostén no deben ser idealizados. En cierta medida, este mercado satisface una exigencia clásica de la ortodoxia monetarista en el Tercer Mundo al poner en contacto desventajoso a una fuerza de trabajo depreciada (por razones que más adelante explicaremos) con un mercado dolarizado (y especulativo) de bienes de consumo y de servicios. Buena parte de esta economía sumergida se nutre de actividades ilícitas de diversas naturalezas, y no actúa simplemente como un mecanismo de redistribución de ingresos, sino también de su concentración en una cúpula de intermediarios y especuladores, que realizan así una suerte de acumulación originaria altamente depredadora. Cualquier política de apertura al sector informal

¹⁰ *Este es el Congreso más democrático...*, op. cit.

tendrá que afrontar riesgos considerables en áreas como el uso de la fuerza de trabajo más capacitada o la distribución del ingreso. Casi huelga anotar el impacto global —incluso ideológico— que esta situación genera al interior de la sociedad cubana, así como las implicaciones políticas del surgimiento y consolidación de un segmento de la población independiente, económicamente y orgánicamente vinculado a las reglas del mercado.

Es justamente por estas razones que el sector informal —devenido también en un dato estructural de la sociedad— reclama un tipo de política que no puede limitarse a la insuficiente oscilación tradicional entre la represión y la tolerancia. La reciente legalización y formalización de algunas actividades productivas y de servicios por cuenta propia ha constituido un paso de avance considerable en la implementación de una política positiva frente al sector informal, incluyendo grados de libertad en la producción y comercialización sobre la base de la relación entre la oferta y la demanda, la descentralización de las acciones de control económico y administrativo y la flexibilidad casuística en la aplicación de determinadas regulaciones.¹¹ Pero no es esperable que resulte una solución definitiva y que otros problemas no aparezcan, poniendo sobre el tapete la necesidad de un continuo perfeccionamiento de una estrategia integradora del sector informal mediante políticas de asignaciones de recursos, de precios, créditos y otros controles (incluso represivos cuando se infrinjan las normas acordadas), y que al mismo tiempo potencie su función social positiva en cuanto a la creación de empleos y respecto a la satisfacción de las necesidades ligadas a la vida cotidiana de las personas.

La expansión e inevitable aceptación del mercado informal como un componente de la economía cubana es sólo una faceta de la reestructuración de las políticas de consumo. Como anotábamos antes, uno de los problemas inmediatos más acuciantes que enfrenta la economía cubana es el exceso de liquidez como consecuencia de la desproporción existente entre la demanda excesiva y el constreñimiento de la oferta. Ningún proyecto de despegue económico puede aspirar a la viabilidad si previamente no ha logrado reducir la liquidez a límites manejables. Para hacerlo se pueden utilizar numerosos mecanismos pero que a la larga se reducen a afectar alguna de las dos variables del binomio oferta-demanda. Sin lugar a dudas, un incremento sostenido de la oferta es la vía más atractiva y ventajosa en términos sociales y políticos, pero también la menos probable en medio de una crisis como la que afecta a la economía nacional. Por consiguiente, el principal recurso efectivo aún cuando se exprese mediante mecanismos diversos va dirigido a reducir la demanda, lo que implicaría una verdadera subversión no sólo de las políticas tradicionales de consumo, sino también de las premisas ideológicas que las han sustentado.

Un principio cardinal de la política de consumo, desde la década del 60, fue la preservación

¹¹ *Granma*, La Habana, 9 de septiembre de 1993.

de una canasta básica racionada a precios muy bajos, combinada desde la década siguiente con un mercado de oferta excedente regido por precios mayores controlados. Los precios libremente ajustados a la interacción de la oferta y la demanda sólo fueron practicados en áreas muy específicas, como el ya mencionado "mercado libre campesino" o en un sector informal de discretas proporciones. Ello suponía subsidios muy fuertes que incidían permanentemente en el déficit presupuestario y en los desbalances financieros internos.

Ninguna evaluación equilibrada podría omitir las virtudes de tal política, que, combinada con la extensión de los programas de salud, educación y asistencia social, evitó a la sociedad cubana los flagelos de la pobreza y la marginalidad social. Ello deberá ser tomado siempre en cuenta como una de las conquistas revolucionarias innegociables. Pero al mismo tiempo, la continuación de una política de subsidios de tal magnitud y característica es insostenible, y su modificación constituye una premisa básica del despegue económico. Dejando a un lado las afectaciones ético-ideológicas que ello implica, no debe olvidarse que, por las mismas razones antes apuntadas, los niveles salariales cubanos son muy bajos (precisamente uno de los atractivos de la inversión extranjera a la luz del tipo de cambio monetario existente) y, por consiguiente, una parte considerable de la población (según cálculos extraoficiales cerca de un 80% de la población recibe ingresos *per cápita* mensuales menores de 125 pesos) resulta muy sensible y vulnerable a un ajuste económico apoyado en un rol más activo de los precios, aun cuando ello sea planificado de forma gradual y con medidas compensatorias.

La inevitable transformación del esquema de consumo existente y la imbricación del consumidor en una relación de compra y venta menos armónica, implicará la variación del rol del Estado en esta área, el perfeccionamiento de los mecanismos de control de precios y la aplicación de políticas diferenciadas de protección a los sectores de menos ingresos. Pero también debe suponer un rol más activo de los consumidores y la potenciación de aquellos espacios sociopolíticos donde éstos se expresan fundamentalmente: las comunidades habitacionales y los gobiernos locales. Los mecanismos actualmente existentes de expresión de demandas por vías individuales y colectivas han resultado en muchos sentidos una provechosa iniciativa institucional en función de la satisfacción de las necesidades básicas y de los problemas relativos a la vida cotidiana. En el nuevo contexto que se abre espacio, sin embargo, su efecto estaría limitado, al menos que se pongan en marcha acciones estimulantes de la iniciativa autónoma de los consumidores y de una mayor vocación autogestionaria de la actividad comunitaria.

La dimensión política

Lo que hemos referido hasta aquí como algunos de los costos sociales de la inserción de la

economía cubana al sistema mundial no son simplemente signos del deterioro de la calidad de la vida, o cambios organizacionales que afectan las relaciones técnicas de producción. Se trata de una alteración cualitativa muy profunda de las coordenadas de la economía política del socialismo cubano. Y por consiguiente, también un proceso de redistribución de las cuotas de poder de los sujetos involucrados. Y si hablamos de poder, nos referimos inevitablemente a la centralidad de la política.

Un primer dato a resaltar es la emergencia de una nueva élite de clara orientación tecnocrática y cuya columna vertebral lo constituye el sector de empresarios autónomos ligado al sector externo y a la inversión extranjera, orientado por la lógica del mercado mundial y situado progresivamente en los márgenes del desvencijado sistema de planificación socialista. En la medida en que se ubica en el área más dinámica de la economía, y en el sector de consumo más sofisticado, este sector emergente posee una alta capacidad de atracción al erigirse como la demostración más fehaciente del éxito en las nuevas condiciones.

Hacia él concurren segmentos importantes de la clase política y de la burocracia tradicional, que perciben que la reproducción de su propio proyecto de poder depende de la reproducción ampliada del esquema de acumulación emergente, aun cuando sea al precio de sacrificar parte de sus propios atributos políticos. De igual manera, es significativa la captación de grupos intelectuales proclives al mercado como principio organizacional o simplemente en busca de un discurso seguro y de una organicidad aquiescente tras la quiebra de la cultura manualística y de los dogmas del marxismo soviético. Por último, la nueva élite tiende a configurar una relación de dominación respecto a los grupos asalariados contratados en las instalaciones hoteleras, firmas de exportación y otras actividades que proveen condiciones de vida mejores que el resto de los trabajadores, en lo que viene a constituir una desfasada "aristocracia obrera" criolla.

Esta red de alianzas objetivas se completa con la incipiente relación que el sector dinámico de la economía inevitablemente establece con la economía informal (y particularmente con su sector más concentrado), y que tenderá a crecer en la medida en que se legalizan las actividades de este último y se dolarizan sus transacciones.

Como contrapartida lógica, en la medida en que se fortalecen los sectores antes mencionados y emerge una nueva élite, se debilitan las posiciones del sujeto popular, protagonista del proceso de cambios revolucionarios desde 1959 y vector histórico objetivo del proyecto socialista.

Ante todo, se trata de un sector extenuado por las crecientes rigurosidades de la vida cotidiana, y fragmentado por la propia acción de los *ghettos* económicos vinculados al capital externo. Al mismo tiempo, la mayoría de la población cubana aparece sobrecargada de mensajes ideológicos distintos y dramáticas traducciones. Una década atrás la convocatoria política se

apoyaba en las referencias al paradigma de un "socialismo realmente existente" idealizado y considerado superior e irreversible, y a la recurrencia a otros valores —nacionalismo, patriotismo, internacionalismo—orgánicos a la cultura popular.

Hoy los paradigmas del "socialismo real" no existen y para el ciudadano común quedan pocas dudas de que la supuesta superioridad e irreversibilidad, no ya del socialismo como meta (lo cual es perfectamente sostenible), sino a un nivel más pedestre, de las experiencias que existieron al Este del Muro de Berlín, no fueron más que una construcción mitológica.

Muy ligado a ello, la prédica nacionalista pasaba por la anatematización de la inversión extranjera como una perversidad imperialista, lo que en sólo cinco años se tradujo en la presentación de esa misma inversión como tabla de salvación, y los inversionistas devenidos en una suerte de "compañeros" merecedores de toda la consideración social. El mercado, que entonces no merecía mejor suerte, se opone hoy a una realidad que muestra a la economía socialista planificada en estado crítico y a duras penas financiada por los *ghettos* económicos directamente conectados al mercado mundial capitalista.

Nada de esto implica que el socialismo cubano haya agotado su arsenal político-ideológico. Mucho menos que pueda prescindir de este arsenal. Lejos de ello, los recursos políticos e ideológicos devienen más necesarios que nunca desde los primeros días del triunfo revolucionario. La convocatoria de la *Rectificación* a rescatar los valores propios de la cultura política nacional en aras de la sobrevivencia patriótica mantiene su absoluta vigencia. Pero su efectividad está en relación directa con la capacidad del sistema para producir un nuevo discurso y una nueva práctica política liberadora de las subjetividades, de manera que la convocatoria a resistir no sea una invitación al holocausto o al inmovilismo, sino un punto de despegue de una nueva rearticulación del consenso nacional sobre bases participativas y pluralistas. Ello, como tendremos oportunidad de analizar, implica un cambio sustancial en la relación biunívoca entre política e ideología, de manera que la práctica política asuma un rol más determinante en la producción ideológica, y no como fue usual en las experiencias del *socialismo real*, donde la ideología prefijada establecía los cánones sagrados de la política.

Una primera premisa de esta construcción pasa inevitablemente por la descentralización del poder político, tema ubicuo y vulgarizado que con frecuencia ha sido reducido a una suerte de economicismo mercantilista. Ciertamente es difícil concebir un proceso práctico de descentralización, sea territorial o funcional, que no conlleve la existencia de las relaciones de mercado, e incluso de la privatización de ciertos espacios económicos, particularmente allí donde el sector público ha tenido una presencia excesiva y poco eficiente. De hecho en páginas anteriores me he referido a tendencias visibles (o a la inminencia de procesos) que implican tanto la extensión del mercado como la privatización (inversiones extranjeras, extensión del sector informal) en la

Cuba contemporánea. Ello puede acarrear ventajas considerables en cuanto a la creación de un marco competitivo estimulador de la movilización de recursos, del aumento de la calidad de los servicios y la producción y de la circulación de flujos más dinámicos de información entre vendedores y compradores.

Tal conveniencia, sin embargo, dista de la aceptación del dogma privatista-mercantilista, y más aún de dejar de advertir las consecuencias negativas de tales procesos en cuanto a la atomización particularista, la erosión de solidaridades, el incremento de las desigualdades sociales y regionales, o, como anotaba Magdoff, la diseminación de criterios de racionalidad diferentes a los que deben regir un proyecto tan complejo y multidimensional como es la cimentación de una sociedad socialista. Y es justamente en este contexto en el que cobra relieve el rol de la planificación como la pieza clave de concertación de objetivos de crecimiento económico y desarrollo social en función de los fines estratégicos del sistema.

El socialismo cubano, tercermundista y bloqueado, no puede renunciar a la idea de que el desarrollo económico es inseparable de la prevalencia del plan (y por supuesto, también de la propiedad social) en la misma medida en que sólo tal escenario puede garantizar los niveles de crecimiento y eficiencia en condiciones socialmente óptimas. Pero ello no implica enfrentar a la propuesta mercantilista con otra de corte centralista-burocrático, un dilema entrampado entre lo que Lukacs denominaba la sustancia de los métodos estalinistas o la introducción de aquéllos vigentes en Occidente". El reto del socialismo cubano reside en demostrar que entre uno y otro extremo pueden existir numerosas mediaciones de planificación descentralizada, técnicamente racionales y democráticas, que implican el procesamiento de las señales del mercado, e involucran una red transparente de circuitos administrativos y políticos y de relaciones de cooperación que no omiten pero condicionan los simples criterios de competitividad. Un escenario de tal naturaleza parecería el más propicio para convertir la descentralización en un marco efectivo de potenciación del ciudadano común —como productor y como consumidor— y no simplemente en una transferencia de atribuciones y funciones en beneficio de élites burocráticas y tecnocráticas localizadas en los niveles empresariales y gubernamentales de base. Este es, sin lugar a dudas, uno de los puntos no resueltos del proyecto socialista cubano.

Sin embargo, en un plano de más larga proyección, el problema de la descentralización sólo se inicia en el aspecto administrativo. Este no puede ser, obviamente, el elemento distintivo del proyecto socialista cubano, sino su compromiso con la socialización del poder, difícilmente alcanzable en condiciones de sórdida subordinación al criterio utilitario de la eficiencia, no importa

¹² Harry Magdoff. "Socialism, Democracy and Planning", *Monthly Review*, Vol. 33, junio 1981.

¹³ Georg Lukacs. *El hombre y la democracia*, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1989.

si esté referida a los usos de la planificación o del mercado; ambos, en última instancia, susceptibles de erigirse en bastiones de poderes inapelables.

La descentralización-socialización del poder implicaría en el contexto cubano la puesta en marcha de una ofensiva socializadora que —reconociendo las acotaciones objetivas actuales— expanda los mecanismos de participación real de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones en las empresas y de los vecinos en las comunidades, estimule la estructuración de cooperativas autogestionarias allí donde el Estado resulta un administrador ineficiente, y provea a las organizaciones populares de una autonomía real en la representación de intereses en la producción de política. Sería, por consiguiente, la potenciación del ciudadano común en su diversidad existencial, la mayor dinámica autónoma de la sociedad civil, el despliegue horizontal de la comunicación política y de la información en detrimento de todo monopolio de su producción y procesamiento, y por esta vía, el fortalecimiento de la responsabilidad social consciente y de la autoidentificación del individuo con sus espacios de producción política, sean éstos los centros de trabajo, de estudio o las comunidades habitacionales.

Y es precisamente un contexto de descentralización-socialización del poder la matriz idónea para el logro de lo que ha sido un déficit de la política cubana: la maduración del pluralismo entendido como el reconocimiento de la diversidad y autonomía de lo sujetos participantes, y en consecuencia, del conflicto como un momento en la creación del consenso.

En realidad, una de las más frecuentes vulgarizaciones teóricas en la sociología política contemporánea ha sido la identificación indiscriminada de la tradición pluralista con el liberalismo, sin tener en cuenta que el liberalismo sólo intentó una de sus variantes: el pluralismo como ingrediente activo de un modelo económico de mercado, en el cual "...los líderes del partido son los empresarios, los electores los consumidores y la misión del votante no es decidir sobre políticas sino escoger una serie de políticos autorizados a decidir las políticas".¹⁵ En buena medida por esta razón, pero también por imperativos políticos en las experiencias socialistas en el poder, importantes parcelas del marxismo se encargaron de rechazar el término, y por lo regular el pluralismo fue considerado una suerte de "perversidad" liberal.

En el caso de la Revolución Cubana esta situación tuvo además un fuerte condicionante histórico. Aun cuando desde los primeros años existieron políticas diferenciadas hacia determinados sectores, es indudable que la unidad en torno al concepto del "Pueblo", más que el acento

¹⁴ Un paso positivo en este sentido ha sido el reciente acuerdo del Buró Político del Partido Comunista para extender las formas cooperativas en la agricultura a expensas de las tierras subutilizadas de las empresas estatales. Véase: *Granma*, La Habana, 15 de septiembre de 1993.

¹⁵ C. B. McPherson. *The Rise and Fall of Economic Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1987.

en la diversidad, aparecía como la garantía ineludible de la agenda revolucionaria y de la defensa de la soberanía nacional frente a la agresividad norteamericana. Tres décadas después esa unidad sigue siendo vital, pero tal y como ha sido oficialmente reconocido, ello no ha estado exento de resultados no deseados marcados por el "irreal afán de la unanimidad", la erección del monolitismo en un *test case* y el desarrollo de actitudes políticas apáticas y simuladoras. Y de cualquier manera es poco probable que la construcción democrática socialista pueda prescindir de un enfoque pluralista más marcado a tenor con la propia complejidad y diversidad social que viene experimentando la sociedad cubana.

No se trata de reducir la meta pluralista al orden multipartidista, ante todo porque, como reza una sabia sentencia, confundir el presente con el futuro es más costoso en política que en gramática. Y en el presente cubano la instauración del multipartidismo pudiera resultar la institucionalidad idónea para la potenciación artificial de corrientes contrarrevolucionarias respaldadas por el injerencismo norteamericano y por la comunidad cubano-americana hegemonizada por la extrema derecha revanchista. Más allá de esta consideración de corto plazo regida por el criterio de la gobernabilidad, cabría preguntarse si el multipartidismo deberá ser un escalón necesario en la construcción democrática participativa y pluralista, teniendo en cuenta tanto sus magros resultados en las democracias liberales más avanzadas, como su inserción en una sociedad que, como la cubana, ha experimentado con éxito otras formas de concertación y en cuya cultura política yace la aceptación del partido único como expresión de la voluntad nacional.

De cualquier manera, evitar estos caminos trillados supone al socialismo cubano retos considerables en cuanto a cómo modelar una institucionalidad y una práctica democrática participativa a partir de un solo centro institucional político, el Partido, que sea capaz de conjugarse con una real autonomía de las asociaciones políticas insertas en la sociedad civil, cuyo rol no puede ser reducido al de la desgastada correa de transmisión en una sola dirección, de arriba hacia abajo; y que al mismo tiempo asuma en sí, incluso en términos organizacionales, toda la pluralidad cultural e ideológica (política, posicional, existencial) presente en la sociedad, y cuyo único límite sea el acuerdo básico en torno a la justicia social, la independencia nacional y la democracia participativa. En resumen, se trataría de un auténtico Partido de la Nación Cubana cuyo eje cohesionador deberá ser el programa y no precisamente la doctrina.

Por supuesto que no hablo de un camino sencillo y sí saturado de dificultades y posibles equívocos. En medio de la euforia neoliberal y de restauración capitalista, vale la pena recordar una indeclinable invitación de Marguerite Duras: "...avanzar, avanzar más que nunca, avanzar más que lo que antes que nosotros nadie avanzó...". Ciertamente una meta situada en las estrellas. Pero recordemos que ha sido precisamente gracias a la altura de sus metas que el ideal socialista ha podido sobrevivir a la ira de sus detractores, a los contratiempos de la historia y a la incompetencia de sus practicantes. Y, por supuesto, continuar siendo una alternativa política viva.